

Informe PNUD: Análisis desbalanceado

Desde 1985 en adelante, Chile vivió un proceso de modernización acompañado de una creciente democratización y ampliación de las libertades, y que elevó el bienestar de la población. Pero es habitual que de estos procesos emerjan nuevas inseguridades y, también, grupos que no hayan logrado beneficiarse. Ante esta realidad, se requieren reformas, pero ha sido complejo materializarlas. El último informe del PNUD intenta explicar por qué. Presenta un material interesante e información valiosa, pero, lamentablemente, el análisis no siempre es balanceado. Incluso, a veces, no se colige de la propia evidencia presentada y, en otras, olvida que el país lleva una década estancado sin que, por ejemplo, las oportunidades laborales de vastos sectores experimenten muchas mejorías. Esta realidad marca el actual estado de ánimo de la ciudadanía.

El informe aborda las insuficientes capacidades para conducir los cambios sociales, pero se concentra, algo simplificado, en dos factores. El primero, relaciones disfuncionales entre las élites, la ciudadanía y los movimientos sociales. Habla de una “villanización” de los liderazgos políticos y el gran empresariado por incumplir las promesas de cambio, poniendo a ambos en un mismo plano. Esto, a pesar de que, preguntados los ciudadanos por quiénes son los mayores obstáculos para los cambios, mencionan los liderazgos políticos de oposición y de gobierno, con un 34% y 33%, respectivamente, mientras que el gran empresariado recibe solo un 7%. Esta asimetría equívoca en el análisis se repite en varios pasajes.

En cuanto a esa respuesta en sí misma, ella refleja la disfuncionalidad que la ciudadanía percibe en el funcionamiento del sistema político. Pero aunque es evidente la existencia de un problema institucional que dificulta la posibilidad de legislar, el análisis presentado apenas toca ese asunto a lo largo de sus más de 300 páginas. Ello, aun cuando la lógica obstruccionista y la polarización que el informe sí destaca no son independientes de la naturaleza de las instituciones políticas y de su poca flexibilidad. Esta dinámica negativa, en efecto, no solo obedece a intereses

mezquinos, como pone en voz de la ciudadanía el informe. De hecho, según el mismo estudio, solo un 23% cree que la principal debilidad de los liderazgos políticos es que ponen sus intereses por delante. Así, las lógicas inhibitorias de la conducción —que se consideran el segundo factor que afecta las capacidades para producir cambios sociales— son más complejas que lo que el informe sugiere. Eso no significa que la escasa creencia de las personas en la influencia de sus acciones para producir cambios, la desconfianza interpersonal y la poca asociatividad, entre otras, no sean dimensiones relevantes. El punto es que esos elementos no son nuevos y, aún así, el país logró en el pasado caminar por otras lógicas. En estas circunstancias, cabe preguntarse hasta qué grado el poco valor que se les atribuye a políticas recientes, el

pesimismo sobre el futuro y el aumento de emociones negativas respecto de 2013, no son explicados también, incluso con mayor peso, por el estancamiento económico y la crisis de seguridad pública que se vive.

Aunque hay mucha información valiosa, el análisis que de ella se hace presenta inconsistencias con sus propios datos.

En este sentido, es interesante que el informe ponga mucha atención en las diferencias entre la élite económica y las demás (política, social, simbólica) respecto de la idea que refleja mejor su sueño para el país futuro, pero no parece percatarse de que las respuestas de ella son las que se acercan más a la ciudadanía.

El informe se fortalece en su descripción de oportunidades que se pueden aprovechar —alta valoración de la democracia, aspiración por cambios, pero graduales, y revalorización de proyectos comunes— y en su análisis de las condiciones que se requiere construir para lograr los cambios. Ello, aunque aquí también faltan matices y hay recomendaciones equivocadas. Por ejemplo, promover la vinculación de los movimientos sociales con el sistema político: la posibilidad de agregación efectiva de demandas ciudadanas, en un contexto en que el propio informe reconoce deterioro en la asociatividad, es escasa y sería sesgada. Así, avanzar en esa línea reduciría la representación, que parece estar mejor lograda en este momento con el voto obligatorio. Estas inconsistencias con sus propios datos son un problema de esta nueva versión del Informe de Desarrollo Humano.